

AGENDA CIUDADANA

DE VUELTA AL TIEMPO DE LA ILEGITIMIDAD

Lorenzo Meyer

De Cadáveres e Imprevistos.- Juan Marsé, el escritor catalán, principia así su última novela (*Canciones de amor en el Lolita's Club*): “El comportamiento de un cadáver en el mar es imprevisible...” Con variantes, Marsé puede ser trasladado a la actualidad mexicana y servir de punto de arranque a esta columna. Es verdad que nuestro sistema político aún no es un cadáver, pero puede serlo, pues ha sido herido de gravedad en su órgano vital democrático –el de las reglas del “juego limpio” electoral-- y flota en el mar de la desigualdad social y a merced de las duras corrientes de problemas insolubles –sociales, económicos, culturales. Y eso es justamente lo que le está sucediendo al supuesto “nuevo régimen” a partir del ya tristemente notorio 7 de abril. Sólo el tiempo dirá cuan grave resultó la herida y si hay posibilidades de recuperación, pero de lo que no hay duda es que hoy la política mexicana flota en el mar de la incertidumbre.

Y esta vez no se trata de la natural y bienvenida incertidumbre electoral, sino de si antítesis: de aquella provocada por la ruptura del gran –y recién aceptado-- acuerdo sobre las reglas de cómo llevar adelante este juego político, es decir, uno donde la última palabra de quien gana y quien pierde la tiene no el presidente en turno, no el Congreso o el Poder Judicial, sino el conjunto de los ciudadanos en el tiempo de las urnas.

La incertidumbre actual es producto de una decisión tomada o aceptada por las cúpulas del poder político, económico y, quizá, religioso, para justamente no someterse ellas y sus intereses, a las reglas de la muy sana incertidumbre democrática. Esta última exige, entre otras cosas, que en las urnas se den cita todas o, al menos, las principales fuerzas políticas organizadas y que gane la que cuente con mayor apoyo ciudadano. Sin embargo,

como los sondeos mostraban que quizá en el 2006 la izquierda, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podía alcanzar el Poder Ejecutivo, quienes actualmente controlan este poder, y de acuerdo con el viejo partido de Estado, decidieron eliminar desde ahora la opción electoral que les atemorizaba. Para esos círculos, la inhabilitación de AMLO como candidato, hace que desaparezca la incertidumbre que les intranquiliza pues cualquiera de los otros candidatos asegura que los intereses creados serán respetados.

La remoción tramposa de la incertidumbre que es natural a una democracia sólo ha trasladado la inseguridad a un plano diferente y realmente peligroso, pues, en la actualidad, ya no hay certeza de la verdadera naturaleza del arreglo político mexicano ni cuales son sus reglas reales. Hoy la política se perfila como el choque directo entre el poder desnudo del Estado y la oposición, lo que lleva el conflicto a arenas donde no hay árbitros, donde el juego es entre enemigos y no meros adversarios. En estas condiciones, es imposible predecir que corrientes, en que dirección y con que resultados, van a arrastrar a la débil y contradictoria estructura del actual sistema de poder mexicano.

La Naturaleza del Problema.- En principio, para todos, incluso para aquellos que públicamente lo niegan, es claro que el origen formal del conflicto es sólo un pretexto para hacer que el choque entre el gobierno, su partido, el PRI y AMLO corriera por una vía que permitiera cubrir con un tenue velo de legalidad lo que es, en realidad, la exclusión forzada de la izquierda del juego democrático. En efecto, y para resumir lo que todos saben, en la Ciudad de México tuvo lugar un conflicto de intereses, como el que hay miles y son inevitables, entre “Promotora Internacional Santa Fe” y una dependencia del gobierno de la Ciudad de México. “Promotora” se inconformó con el intento del gobierno de abrir una calle de 200 metros en un terreno denominado “El Encino” para dar acceso a un hospital. En el proceso de construcción de la calle se crearon dos taludes de 25 y 30 m. que

significaban un obstáculo para el acceso al terreno. Un juez ordenó que los trabajos del gobierno se detuvieran y éstos se detuvieron, aunque no en el punto y tiempo exacto. Por esta falla burocrática, que es una entre muchas de naturaleza similar, el gobierno federal sostiene que el jefe de Gobierno y sólo el jefe de Gobierno, y no sus subordinados, había violado gravemente la ley, debía perder el fuero y ser procesado como criminal.

Y como el sistema legal mexicano, que es herencia del antiguo régimen autoritario, presume que el acusado es culpable en tanto no pruebe a satisfacción del juez su inocencia, y como tal sistema legal que, insisto, es producto del México antidemocrático, no permite que un acusado conserve sus derechos políticos a pesar de que no se haya probado su culpabilidad, entonces el personaje en cuestión queda automáticamente inhabilitado para ser candidato a un cargo de elección popular. No deja de ser significativo que esta disposición va a contrapelo de lo que sucede en el resto del mundo, pues sólo en México y en El Salvador el mero hecho de que alguien esté acusado de un delito que merece pena corporal le prive de sus derechos políticos. En suma, el castigo se inicia antes de probarse la culpabilidad.

Y ésto es lo va a ocurrir con AMLO, y va a ocurrir justo en el momento adecuado para sacarlo de la contienda electoral. De esta manera, la elección que hubiera podido ser la primera libre de toda sospecha –después de todo, es la primera donde el PRI ya no está en el poder-- y con candidatos y propuestas significativamente diferentes entre sí, de pronto se convierte, en una elección de “contenido limitado”. Se trata de una democracia tutelada que, en realidad, le hace perder su esencia.

Así, en virtud de un asunto absolutamente menor en cualquier país, los partidos que forman la mayoría en el Congreso ya le quitaron a López Obrador el fuero y el puesto para el que fue electo por la mayoría de los habitantes del Distrito Federal. Una elección

democrática, la del 2000 en la capital del país, ha sido simplemente revocada por los diputados federales.

Pero lo peor está por venir: la posibilidad de que se haya iniciado un juego donde se busca ganar las elecciones mucho antes de que éstas tengan lugar, más o menos como en la época del PRI. Para los adversarios de AMLO lo importante no es decidir quien será el sucesor de Fox, sino quien no lo será. El objetivo es eliminar legalmente la posibilidad de un triunfo en las urnas de AMLO y de un movimiento social cuyo núcleo sería el PRD, pero que además podría y tendría que ser mucho más que ese partido. Eso, más que AMLO mismo, es el objetivo del ataque: destruir al movimiento social antes de que se inicie.

Democracia Castrada.- Formalmente, el PRD no ha sido ni será eliminado de la contienda, pero al privarlo de su mejor candidato, prácticamente se asegura su derrota y su preservación como una fuerza relativamente menor. Según la encuesta reciente de Reforma (9 de abril), con otro candidato, el PRD podría conquistar un segundo lugar en las urnas, pero nunca el primero. Ahora bien, en un sistema presidencial y no parlamentario como el nuestro, el primer lugar es lo que cuenta, pues nuestro sistema está diseñado para que, quien gane por mayoría, aunque sea relativa, se lo lleve todo a nivel del gobierno federal. El espacio para el segundo lugar se encuentra en el Poder Legislativo, en un sitio, obviamente, secundario. Este escenario de un PRD sin acceso al aparato de gobierno, sería el mejor para Fox y quienes desde el año pasado empezaron a trabajar para hacerlo realidad: un PRD que compita pero sin López Obrador, un PRD que se mantenga con vida pero que pierda en lo esencial, un PRD que sea testigo pero no afecte a los intereses creados. De ocurrir ésto, se podrá decir que la democracia sigue viva en México, pero sería una democracia limitada, castrada (o tutelada por la derecha, si se prefiere una figura menos drástica para una situación que es drástica).

Duopolio.- Una vez que el PAN absorbió el shock de haber quedado en tercer lugar en las fraudulentas elecciones de 1988, decidió, y con razón, que el enemigo real no eran Carlos Salinas y el PRI, sino Cuauhtémoc Cárdenas y su partido. De ahí que desde 1989 el PAN, bajo la dirección de Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza diseñaran una colaboración negociada con Salinas, y de la que salieron, lo mismo la legitimidad a *posteriori* de Salinas que las primeras gobernaturas panistas, las leyes que pondrían fin a la reforma agraria, la incorporación de la Iglesia Católica al proceso político, la privatización de la banca, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, etcétera. Esa misma colaboración llevó a que en 1994 el candidato panista no se convirtiera en competidor real del candidato presidencial “emergente” del PRI, Ernesto Zedillo. Lo esencial era neutralizar cualquier posibilidad de que se repitiera el éxito cardenista del 88, y se logró. Con el cardenismo en el tercer lugar, se hizo posible la alternancia a favor de Vicente Fox. En esta lógica, el posible retorno del PRI a “Los Pinos” en el 2006, no significa más que un nuevo paso en la consolidación de un duopolio en la vida política mexicana.

Conviene recordar que la victoria de Fox hace casi cinco años, abrió la posibilidad de dar un golpe contundente al PRI, quizá definitivo, pero el triunfador y su partido regularon ante tal idea. Al contrario, desde el inicio se incorporó a personal del viejo régimen al gabinete –notablemente en Hacienda y en la Procuraduría General de la República— y al PRI se le ofreció cogobernar “el cambio”. El resultado se ve claramente hoy: si la transición política mexicana no es otra cosa que un acuerdo entre dos partidos con el mismo proyecto para alternarse en el poder, entonces México se ha estacionado en algún punto entre el viejo autoritarismo y la democracia real.

“El Encino” es Nuestra Lewinsky.- La dureza de la derecha contra aquellos que pretenden una política nacional diferente a la que ellos consideran adecuada, la que respete

sus derechos sobre cualquier otra cosa, no es exclusiva de México. Hace seis años, en 1999, la derecha norteamericana intentó, por un asunto trivial y privado –la relación del presidente William Clinton con una joven becaria que trabajaba en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky— llevar a juicio al odiado “demócrata liberal” y sacarlo de la presidencia por haber mentido ante un jurado en torno a la naturaleza de su relación con Lewinsky. El mundo entero vio entonces, atónito, incrédulo, como por un asunto absolutamente irrelevante y muy privado –un affaire extramarital-- todo el sistema político del país más poderoso del mundo se paralizó y concentró su energía en resolver un embrollo legal pero ridículo, y detrás del cual se escondía un choque formidable de intereses económicos e ideológicos. Se vio a un fiscal que, apoyándose en la ley pero motivado por un odio ideológico inocultable que le hizo perder contacto con el sentido común –Kenneth Starr--, buscó deshacer con un argumento formal –perjurio y obstrucción de la justicia--, lo que las urnas habían decidido años atrás. Tras un gasto de 45 millones de dólares, el Senado norteamericano, por 55 contra 45, declaró que el presidente no sería llevado a juicio ni perdería su cargo, simplemente sería humillado. Para todos fue claro que Starr y sus apoyos del Partido Republicano no buscaban “encontrar la verdad” sino destruir al presidente. No lo lograron, pero el republicano y conservador George W. Bush, se montó en el discurso de “recuperar la dignidad” de la presidencia para sacar de la Casa Blanca a los liberales ;y finalmente lo logró, a pesar de haber perdido el voto popular! En México, el equivalente del “affaire Lewinsky”, es el “affaire ‘El Encino’”, un asunto que ya ha sumido a la joven democracia mexicana en una crisis que puede desembocar en una elección formalmente legal pero no legítima.

¿Existe la posibilidad de que el Poder Judicial enmiende el entuerto creado por los otros dos poderes? La historia no da mucha esperanza, pero, por principio, no debe

descartarse este desenlace. En cualquier caso, el ciudadano debe de estar consciente que la evolución política de México ya marcha por un camino que no lleva a la consolidación democrática.